

Liberalismo penal y poder de castigar en Argentina: exceso y restricción en las voces expertas de la Universidad de Buenos Aires durante el siglo XIX. .

Colombo, Rafael.

Cita:

Colombo, Rafael (2008). *Liberalismo penal y poder de castigar en Argentina: exceso y restricción en las voces expertas de la Universidad de Buenos Aires durante el siglo XIX*. V Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-096/342>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/edBm/SFA>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
<https://www.aacademica.org>.

Autor: Rafael Colombo¹

Pertenencia institucional: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Universidad Nacional del Litoral

Correo electrónico: rafaelporsiempre@hotmail.com

Ponencia: “Liberalismo penal y poder de castigar en Argentina: *exceso y restricción* en las voces expertas de la Universidad de Buenos Aires durante el Siglo XIX”²

Mesa: 22

¹ Estudiante de Derecho (FCJS – UNL). Ayudante de cátedra alumno por concurso de Introducción a la Sociología (FCJS – UNL). Miembro del proyecto CAI + D “Defender la sociedad: el nacimiento de la criminología en Argentina (1880-1940)”. Director: Máximo Sozzo.

² Este trabajo debe considerarse en el marco de una investigación colectiva llevada a cabo por el grupo de investigación del proyecto CAI + D “Defender la sociedad: el nacimiento de la criminología en argentina” que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. En especial agradezco al director del proyecto, Prof. Máximo Sozzo, a Natacha Guala, María Victoria Puyol, Mariana de Olazabal, María Soledad Emmert, Gisela Frutos, Yanina García y Paula Fusari. Por supuesto, los errores e imprecisiones conceptuales son de mi responsabilidad exclusiva.

Introducción.

Durante las dos primeras décadas del siglo XIX en Argentina, comenzó a desarrollarse una un “discurso experto” en torno al delito y la pena dentro del contexto de la ciudad de Buenos Aires.

La fundación de la Académica de Jurisprudencia en 1815 y, seis años después, en 1821, de la Universidad de Buenos Aires y su Departamento de Jurisprudencia deben leerse como dos acontecimientos significativos en la progresivo desarrollo de un “saber serio” que tenga al derecho criminal como objeto de estudio diferenciado dentro de la carrera de leyes (Barreneche: 2001, 143-153; Sozzo: 2007a, 23; 2007b, 637)

Junto a estos gestos institucionales, fueron desembarcando algunas obras “serias” sobre el saber criminal provenientes de Europa.

Estas obras se inscriben dentro del marco de las ideas ilustradas sobre la cuestión criminal que “emergieron” durante la segunda mitad del siglo XVIII. Textos como “El contrato social” (1762) de Jean Jacques Rousseau”, “De los delitos y las penas” (1764) de Cesare Beccaria, “El espíritu de las leyes” (1748) del Baron de Montesquieu, el “Tratado de legislación civil y penal” (1802) de Jeremy Bentham, o la “Ciencia de la legislación” de Gaetano Filangieri (1780) circulaban por los incipientes espacios universitarios de entonces (Barreneche: 2001, 140; Sozzo: 2006b). Estas obras no dejarían pasar desapercibido el problema del delito y el castigo aun cuando se inscribiesen dentro de temáticas mas amplias. De hecho, es posible rastrear un importante invocación hacia ellas, por parte de los aspirantes a doctor en jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires, entre la segunda, tercera y cuarta década del siglo XIX.

Aunque sin dejar de citarse los autores recién mencionados, a partir del año 1860 aproximadamente, comenzaron a formar parte del debate sobre el crimen y el castigo los llamados textos “neoclásicos” producidos durante la primera mitad del siglo XIX en Europa (Taylor, Walton, Young, 1990, 25-28; Sozzo, 2006b, 18). En este sentido, autores como Pellegrino Rossi, Joaquín Pachecho, Joseph Ortolan, Chaveau Adolphe y Faustin Helie constituyeron una fuente de consulta frecuente para las voces expertas de la universidad (aunque algunos de ellos sin traducción al español).

En estos “viajes culturales”, es posible observar otro proceso - esta vez de traducción y apropiación - en donde la recepción estos textos ilustrados se caracterizaron por ser una gran

operación de “transplante” que reproducía acríticamente los modelos extranjeros (Sozzo, 2006: 358-365). En muchos otros casos – algunos de ellos, analizados en este trabajo – existió la urgente necesidad de “ajustar” los temas con el específico fin de responder a las necesidades locales; lejos de ser meras reproducciones de ideas foráneas, estos textos introdujeron importantes modificaciones en los objetos de estudio por entonces privilegiados, configurándose una suerte de “metamorfosis” en la operación de recepción (Sozzo, 2006: 365-375; 2007b, 636)³.

Tesis para optar el grado de doctor en jurisprudencia

La primera tesis manuscrita para obtener el grado de doctor en jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires fue presentada en el año 1827 bajo el título “Disertación sobre los delitos y las penas” de Florencio Varela. Este texto, junto a la tesis de Carlos Vilademoros titulada “Necesidad de que se reformen los procedimientos de la justicia penal”, pueden considerarse como los dos primeros obras “expertas” sobre la cuestión criminal en Argentina.

Florencio Varela recibió la influencia del Profesor Pedro D. Somellera, primer catedrático de Derecho Civil de la Universidad. Influido por Bentham, Somellera había asumido el cargo de profesor en el año 1822 y ocupó ese lugar hasta 1830 (Levaggi, 1977, 110; Barreneche: 2001, 156; Caimari, 2004: 36-37; Sozzo, 2006b: 10-11; 2007a: 23-24)

En cuanto a las características de las tesis, estas eran defendidas oralmente ante un tribunal. Esto trae como consecuencia su carácter estilizado y narrativo, con importantes momentos para lucir un vocabulario locuaz, muy cercano al estilo de los manifiestos verborrágicos y esplendorosos. Por lo general, comienzan con la o las proposiciones que van a ser defendidas en la exposición y luego se realizan repases históricos, citas de autores con los que se discute o sirven para reforzar una idea, menciones de leyes penales u apotegmas antiguos.

³ Lejos de ser está una observación conceptual y exterior, es posible rastrear a lo largo del siglo XIX, un intenso debate sobre la necesidad de “adaptar” o no aquellos modelos extranjeros (sobre todo el español) a un sistema de la organización administrativa, política, jurídica y cultural que pretendía ser – con todas sus contradicciones – fiel heredero de los ideales de mayo de 1810. Mencionamos por ejemplo, la tesis de Augusto Elías que, en 1880 decía: “Podemos, pues, decir que siendo grande el pensamiento que domino al legislador, no responde a él la ejecución de la obra ¿Por qué señores? Porque un código debe reflejar en cada una de sus páginas las doctrinas sancionadas por la razón y la ciencia e interpretar fielmente las costumbres, las tradiciones y los principios políticos de cada país; y allí no siempre conducen los modelos extranjeros” (Elías, 1880, XXII)

Las tesis de grado fueron inicialmente manuscritas. A partir de 1863 la Universidad de Buenos Aires ordeno que por resolución, la impresión. De esta forma es posible que el nivel de difusión de estos documentos, haya aumentado considerablemente tanto por dentro como por fuera del contexto universitario. Ello explica que, por ejemplo, la tesis de Varela fuese publicada en la Revista de Legislación y Jurisprudencia en el año 1870⁴.

Cátedra de Derecho Penal y Mercantil

A pesar de que es posible rastrear un considerable número de tesis doctorales sobre la cuestión criminal entre hacia mediados del siglo XIX, recién en el año 1856 se crea la cátedra de “Derecho Penal y Mercantil” en el ámbito del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires. La creación de la cátedra acelero el desarrollo de, por un lado, una progresiva diferenciación disciplinar que tuvo al Derecho Criminal como una rama de la enseñanza del derecho. Un celebre abogado con el nombre de Carlos Tejedor fue designado para el cargo de profesor titular⁵.

Cinco personas diferentes presidieron la cátedra en menos poco más de 30 años.

En efecto, Tejedor se retira temporalmente en 1858, año en que es sustituido por Ángel Navarro; regresa en 1861 para abandonarla definitivamente menos de tres años después en 1864. Entre 1864 y 1872 ocupó el puesto Miguel Esteves Sagui, otrora aspirante a doctor en jurisprudencia; le siguieron Gregorio Perez Gomar, quien presidió la cátedra durante el año 1872. Seguidamente, asume en forma permanente Manuel Obarrio hasta 1887 siendo este él catedrático más estable (15 años) durante el periodo que abarcamos en este trabajo. El profesor Norberto Piñero, entonces profesor suplente Obarrio en la cátedra, es quien ocupa el puesto desde 1887. Su discurso inaugural para el curso de 1887, institucionaliza a la ideas de la “Scuola Positiva” en el contexto académico. (Piñero, 1887, 163-177; Del Olmo, 1992, 22).

Si la cátedra de derecho penal y mercantil fue una *condición de posibilidad* que incentivo la producción de textos expertos, está dio nacimiento también a un nuevo “sujeto experto”: el

⁴ Recientemente, la revista Nueva Doctrina Penal publicó la tesis de Varela (2007 A) precedida de un interesante ensayo del profesor Máximo Sozzo (Sozzo, 2007, 635-648)

⁵ Ver también Candioti (1920, 445). También historiadores del derecho como Pestalardo (1921, 8-9), Silva Riestra (1935, 65-66), Nilve (1945, 38-41), Levaggi (1972, 77-80; 1977, 184). Asimismo, los trabajos de Marteau (2001, 39-59); Caimari (2002: 148-149; 2004: 48-49); Sozzo, (2006b 2-5; 2007a: 25).

“criminalista” o “penalista” (Sozzo 2006b, 2; 2007a, 25; Marteau, 2003, 71). Este sujeto, no esta ya abocado a estudiar jurisprudencia en sentido general, no es un “hombre de derecho” mas, idéntico a otros que circularen por las aulas de la facultad. Este nuevo sujeto ostenta una específica profesión que le exige “pensar” y “enseñar” en exclusiva referencia al derecho criminal.

Libros de saber experto sobre el derecho criminal producidos en Argentina

Durante el periodo que va de 1856 hasta 1887 se gestan los primeros libros específicos sobre el “saber criminal” y los primeros proyectos de Código Penal para la República Argentina. Con estas producciones se produce una mayor especialización temática al interior del derecho criminal. Esta especialización se caracteriza por ordenar, clasificar y sistematizar los múltiples temas que involucran al derecho criminal.

Hasta la publicación del “Curso de Derecho Criminal” en 1860 o el “Proyecto de Código Penal para la República Argentina” (encargado por decreto en 1864 y entregado finalmente en 1868) o el “Curso de derecho penal” de Manuel Obarrio, los únicos textos expertos que circulaban eran las tesis para obtener el grado de doctor en jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires o algunas publicaciones periódicas de revistas especializadas que comenzaron a salir a partir de 1830 (Laplaza, 1945: 71).

El “Curso de derecho criminal” de Tejedor, es la primera corpus teórico, dividido por materias, secciones y campos de saber diferenciados en el derecho criminal. La obra fue directo fruto de las clases dictadas mientras presidio la cátedra.

El “Proyecto de Código Penal para la República Argentina” comienza a gestarse a partir de el 9 de junio 1863, cuando se autoriza por ley la designación de comisiones para sancionar los códigos en materias Civil, Penal y de Minería (Nilve, 1945, 35-36; Levaggi, 1977, 178-193). Tejedor entrega la mitad del proyecto en 1866 y la segunda y definitiva, en 1868⁶.

⁶ Luego de que Tejedor entregase el “Proyecto...”, se designa una comisión compuesta por tres abogados para “examinar prolijamente” el texto producido (Silva Riestra, 1935, 72; Nilve, 1945, 44-45; Marteau, 68-69). Esta comisión no habría de expedirse hasta el año 1881 siendo finalmente 1886, el año en que el congreso federal sanciona un código penal para la nación toda a través de la ley 1920 (Terragni, 2000, 70). En el ínterin, en octubre de 1877 la legislatura de la Provincia de Buenos Aires sanciona -a raíz de las demoras de la comisión revisora- la ley 1.140 que introducía un Código Penal para su territorio tomando como base la obra presentada por Tejedor al Congreso Nacional en 1868. A partir de el 1º de enero de 1878 comienza a regir la primera “ley

Durante mas de dos décadas, el “Curso...” y el “Proyecto...” escritos por Tejedor fueron las fuentes de referencia para estudiantes y académicos interesados en el estudio del derecho criminal.

Recién en 1884, con la publicación del “Curso de derecho penal” de Manuel Obarrio en que se produjo una obra de similares características estructurales a la de Tejedor. El “Curso de derecho penal” de Obarrio se distribuye a partir de una serie de lecciones reunidas por Mariano Orzabal, estudiante de jurisprudencia y taquígrafo, que reunió las clases de Obarrio durante el periodo en que ocupó la cátedra.

Continuidades y discontinuidades: lo viejo y lo nuevo

A partir del siglo XVIII, el ejercicio del poder social castigar comienza se concentrarse así mismo – reflexivamente – dentro de demarcaciones racionales, practicas “civilizadas” y limites punitivos. Ya no es posible que el soberano obre con las “excesivas” arbitrariedades y discreciones propias del “ancien régime”. Ya no es aceptable el suplicio ceremonial del condenado, los cuerpos descuartizados, su exhibición ritualizada. Por el contrario urge la necesidad de colocar el castigo “atrás del escenario”, “fuera de escena” (Garland, 1999, 274), “entre bastidores” (Pratt, 2006, 23-24).

El eje conceptual de la expresión “Economía restringida” fue formulado inicialmente por el filosofo George Bataille en su libro “La parte maldita” de 1949.

Entre los siglos XVII y XVIII, la burguesía moderna prescribirá que la riqueza debe sujetarte a los parámetros de un “gasto funcional”; en consecuencia, será posible hablar de un “gasto restringido” dentro de una representación estrictamente económica del mundo.

La *economía restringida* se mueve entonces, dentro de la lógica de un modelo de producción, inversión, reinversión y valorización de utilidades y excedentes. Se opone a la “económica del exceso” – propia del orden feudal, premoderno – en donde impera la prodigalidad, el despilfarro, el desperdicio del excedente y ese “gasto improductivo” que la burguesía habría de aborrecer y denostar en aras de un proyecto político de dominación aceptable contra las clases pobres. (Bataille, [1949] 2006).

penal moderna” en argentina (Sozzo, 2006b, 3). El resto de las provincias argentinas no tardaran demasiado tiempo en emprender similares acciones.

Como se sabe, a partir de la publicación de “Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión” (1975) de Michel Foucault, vuelven a *emerger* algunos de los temas desarrollado por Bataille aunque esta vez, en lugar de hablar de una “economía restringida”, Foucault emplea una denominación decididamente mas sugestiva. Habla en efecto, de *economía política del poder de castigar* (Foucault, 2002, 85).

Más contemporáneamente y desde el contexto anglosajon, fue Simon Hallsworth quien volvió a retomar la idea de una “economía restringida” como una forma de leer el proceso de transición de una penología pre-moderna a una penología moderna y civilizada.

Señala Hallsworth que la “economía restrirngida” comenzó, a partir del siglo XVIII a “colonizar” todas las áreas de la vida social. En el área de la penalidad la incorporación institucional del debido proceso, la proporcionalidad de las penas y el confinamiento del patíbulo, constituyeron efectos positivos en relación al orden penal premoderno que estaba bajo el signo de la *economía del exceso*. (Hallsworth, 2006, 63-66)⁷.

Foucault, por su parte, se analiza detalladamente el ritual del suplicio durante el siglo XVIII en Francia y el denominado “derecho de venganza” que ejerce el rey ante la infracción de una ordenanza. La infracción a la ley es un delito contra la persona del rey. El derecho de castigar durante el antiguo régimen “... es el derecho del soberano a hacer la guerra a sus enemigos” (Foucault, 2002, 53). Corresponderá – aunque no exclusivamente - al pensamiento ilustrado condenar la atrocidad del suplicio (Foucault, 2002, 61).

Específicamente, Foucault hablara de una “mala economía del poder”, a partir de una situación de “sobrepoder monárquico” (Foucault, 2002, 83-86). “La nueva teórica jurídica de la penalidad cubre de hecho una economía política del poder de castigar” (Foucault, 2002, 85). En Italia, Mássimo Pavarini utiliza la expresión “economía de la parsimonia” para referirse a la filosofía de la penalidad moderna como “Un ejercicio de autolimitación sistémica (los garantistas de la pena mínima) como de limitación extrasistémica (los finalistas de la pena útil). Es decir, que aun el sufrimiento penal moderno debe someterse a la lógica del ahorro y la inversión” (Pavarini, 2006, 131; ver también 1992, 9-21).

⁷ Con excepción de Simon Hallsworth y la reformulación de Massimo Pavarini, el resto de la literatura citada en este punto no engloba estas estrategias punitivas bajo la noción de *economía del exceso*. Sin embargo, un común denominador en estos trabajos consiste en la visualización de estas estrategias como emergentes de una penalidad “emotiva y ostentosa” (Pratt, 50-53) y con ello, la manifestación de un giro punitivo que altera los fundamentos de la modernidad penal.

Con todo esto, a continuación me propondré a analizar el discurso experto sobre el poder de castigar en argentina a partir de estos dos grandes momentos: el primero gira alrededor del *exceso* como práctica penal dirigida contra el cuerpo de los condenados; el segundo, signado por la *restricción* hacia las respuestas del poder soberano del estado.

Entre el exceso y la restricción es posible problematizar la historia del pensamiento penal argentino durante el siglo XIX. Mas arriba identificamos algunos momentos clave en un periodo que abarca 60 años. Sin embargo, en el presente trabajo explorare los discursos de ocho tesis doctorales del periodo que va del año 1860 a 1886.

La tesis en cuestión son:

- Rafael Pidividual: “Fundamento del derecho que tiene la sociedad para castigar” (1860) de 1860.
- Emilio Cabral: "Derecho de castigar", de 1865.
- Miguel Laurencena: "Derecho de castigar. Su fundamento", de 1877.
- José Pío Cisneros: "Derecho de castigar", de 1878.
- Valentín Fernández Blanco: "Exposición y examen crítico de los diversos sistemas que se han formulado para explicar el origen del derecho de castigar", de 1879.
- Domingo Silos Susviela: "Origen del derecho de castigar y fundamento de la penalidad", de 1880.
- Juan Francisco Seguí: "Sistemas penales. Investigaciones sobre el origen y fundamento del derecho de castigar", de 1884.
- Ramón Rodríguez Soto: "Origen y fundamento del derecho de castigar", de 1886.

Exceso

En primer lugar, los tesistas realizan un repaso histórico de la penalidad. Estas referencias históricas están primordialmente asociadas a la noción de “exceso”, es decir, a la mención de formas jurídicas penales “brutales”, “indignas”, “abusivas”, “tormentosas”, “salvajes”, “horribles” donde el “suplicio” del infractor era una practica ampliamente difundida. Asimismo, estas terminología calificativa se corresponde con otra, ya mas circunscripta a

momentos de la historia y referencias geográficas específicas y recurrentes. En efecto, el exceso de los castigos en la “antigüedad” está localizado en las ciudades de Grecia y Roma; luego, se hace alusiones al castigo durante la edad media, siendo el “feudalismo” y “el cristianismo” sus dos referentes institucionales. Luego, con la ilustración y la denominada “invasión de la razón”, habría nacido la *moderna ciencia criminal* y con ello, un marco regulatorio que instaure un equilibrio entre los individuos y el estado.

En relación a Grecia, los tesisistas sostienen que nadie se había ocupado la ley penal durante el periodo. Dice Emilio Cabral en su tesis: “La Grecia, pueblo de una civilización tan adelantada, que se ocupó de las ciencias morales y políticas, nada hizo por la ciencia de la legislación penal” (Cabral, 1865, 8). Refiriéndose a la ley y al derecho penal, dice otro tesisista: “Nada se encuentra de ella en los filósofos de la Grecia antigua (...) Mas el derecho penal permaneció en olvido, y la ley criminal quedó abandonada al acaso, sin que la ciencia le dirigiese otra mirada o interés” (Pió Cisneros, 1878, 9). Al parecer, la ciencia jurídica se había desarrollado pero en clara ignorancia hacia los problemas entorno a los delitos penales: “...porque es menester notar que los grandes problemas de la legislación penal no han sido objeto en la antigüedad de esas profundas investigaciones que en otras ramas de la ciencias jurídica nos han legado monumentos grandiosos” (Seguí, 1884, 11).

Roma no constituyó una excepción a esta idea: “Durante el imperio, progreso la legislación civil. Dictáronse los magníficos códigos que son la fuente de la legislación moderna, pero nada se hizo por la legislación penal” (Cabral, 1865, 8).

Junto a este reproche surge otro, más resaltado aun: la crítica y condena de los excesos.

Aquí se puede observar referencias más específicas, en tanto son mencionadas algunas figuras políticas ya sea a título de consonancia con los excesos o en forma contradictoria con la figura nombrada. Por ejemplo, Silos Suviela habla de cómo Nerón y Calígula “...abusaron de su poder, regando de humana sangre la tierra virgen, llenando de lágrimas inocentes todas las pupilas” (Silos Suviela, 1880, 8). Seguí se asombró de que “...naciones relativamente más civilizadas en esa época, Atenas, patria de Demóstenes y de Solón, se vio durante siglos afrentada por *suplicios horribles*” (Seguí, 1884, 10). Siguiendo con Roma, Seguí sostiene que periodo de moderación en las penas del que habla Tito Livio⁸ – citado por tesisista – “...duro

⁸ Es probable que Seguí haya consultado - no sabemos si como fuente primaria o como extracción de otros estudios sobre el tema – la monumental obra “Historia de Roma desde su fundación” del historiador romano Titus Livius (59 AC – 17 DC)

bien poco. Ella fue reemplazada por el histórico *suplicio* de la roca Tarpeya, por la decapitación del reo ya muerto, (acto que revela un *ensañamiento y brutalidad* salvaje), por el saco aquel en que se encerraba al condenado y se le arrojaba al Tiber, teniendo su especialidad agravante para el parricida; y finalmente, por la cruz y la entrega del delincuente a las bestias feroces” (Seguí, 1884, 11). Rodríguez Soto, reproduce una particular una cita legislador ateniense Dracon: “No conozco crimen que por pequeño que sea, no merezca el último suplicio...” (Citado en Rodríguez Soto, 1886, 11) Roma siguió los pasos de Grecia, al efectuar una replica de las recopilaciones de Dracon: es frecuente allí – dice el tesista citado “...el duro tormento y la pena de muerte” (Rodríguez Soto, 1886, 12).

La mismísima legislación del periodo reproducía este suerte de “enamoramiento del exceso” y con ello, la inexistencia de un *debido proceso*: “Y en fin, en toda parte , en todo país, de la antigüedad, que se examine su código, se encontrara grabados en sus paginas innumerables que respiran solo *crueledad y venganza*; se vera con repugnancia en muchos de aquellos pueblos imponer sin compasión alguna por castigo el duro *suplicio* de la rueda, la decapitación por medio de la cuchilla, y con profundísimo dolor, se verá también dar al magistrado sentencia de muerte al reo sin dejarle abrir antes sus labios para coordinar dos ideas, para pronunciar siquiera dos palabras en su defensa”. (Soto, 1886, 12-13)⁹.

En relación a la edad media, los tesistas detectan una “continuidad” – y hasta quizás, una agudización – de los excesos: “En la edad media solo se ocuparon de restaurar la legislación romana e inventaron los *suplicios mas horribles* para el desgraciado, victima de su crueldad...” (Cabral, 1865, 9). “Durante la edad media se aumentan las penas, se inventan los castigos mas crueles” (Cabral, 1865, 11). La continuidad antes mencionada también se extiende al predominio de la legislación civil y la sinrazón del periodo: “La edad media no ha podido ser una época científica (...) Todo recaía sobre la ley civil. Las leyes penales de los bárbaros continuaban abandonadas a si mismas, sin que se levantase una sola voz para sujetarlas a la critica de la razón” (Pió Cisneros, 1878, 11). Particularmente, el tesista José Seguí identifica un advenimiento de los limites: “al salir de la noche de la edad media las sociedad han procurado limitar, aunque todavía de manera vaga y confusa, estas *penas excesivas y brutales*”. (Seguí, 1884, 11).

⁹ Conviene detenerse aquí en una relativa contradicción: nótese que los tesistas reprochaban la ignorancia que sufrió la legislación penal durante la antigüedad; seguido a esto, para la crítica del exceso citan ejemplos de suplicios (roca tarpeya, “decapitación del reo” entre otros) y mencionan códigos y codificadores que presumen un tratamiento penal del problema del crimen o las infracciones a la ley.

A la noción de excesos en los castigos se suma, la idea de arbitrariedad en la persecución de los delitos. Entre un hombre que vive en sociedad, que no violenta la ley natural ni positiva, que no viola los derechos de sus semejantes, en suma, que "...su conducta intachable no deja nada que desear", se pregunta Laurencena "¿Sería justo que las autoridades le procesaran con un *pretextó cualquiera* y le hicieren sufrir una *pena inmerecida*?" (Laurencena, 1877, 29) "Una pena impuesta en tales condiciones sería un atentado contra la moral, contra los derechos mas sagrados del individuo y el poder que cometiera semejante desmán sería considerado como un déspota arbitrario" (Laurencena, 1877, 29). Es en definitiva el punto que según Pió Cisneros marca una revolución en el Derecho Penal: el desarrollo del Ministerio Público (Pió Cisneros, 1878, 16-17) como órgano que limita esa venganza pública, de carácter tribal, tan difundida en esos tiempos Cabral, 1865, 10; Pió Cisneros, 1878, 13; Soto, 1886, 13).

Ya en Argentina, son escasas las menciones periodo colonial o anterior a la Batalla de Caseros como representativos de un pasado reciente repleto de excesos. Tal es así, que en las tesis analizadas aquí – aunque no ocurre lo mismo en otras disertaciones trabajadas pero que no tratan exclusivamente el tema del poder de castigar- no se encuentran referencias a esto.

Saliendo del ámbito documental de las tesis, en el "Curso de Derecho Criminal" (1860) de Carlos Tejedor podemos encontrar una crítica en la dirección arriba mencionada: "La revolución de la independencia, no podía menos de reconocer que no eran delitos para nosotros muchos de los hechos castigados por las leyes españolas; que los mismos que merecían este nombre, estaban penados con demasiada crueldad" (Tejedor, 1860, 11). Seguido a esto, Tejedor asimila cada una de las legislaciones coloniales con un periodo de la historia, forma de gobierno, forma de opresión o sometimiento: "En resumen, puede decirse que el Fuero Juzgo representa la época de los bárbaros; el Fuero Real y las Partidas la feudalidad; y las Recopilaciones, la Monarquía y el Coloniaje" (Tejedor, 1860, 12).

Otro futuro integrante la cátedra de "Derecho penal y mercantil" entre 1864 y 1872, Miguel Esteves Sagui hace alusiones específicas entre la legislación colonial y el sometimiento español. Dice Sagui: "Tomad el Fuero Juzgo y encontrarais levantado siempre el azote (...) Recorred el Fuero Real y allí encontrareis, si bien la justa indignación del delito" (Sagui, 1871, 142-143). En el marco de la conferencia de apertura para el Curso de Derecho Penal para 1871, el entonces responsable de la cátedra menciona además reyes como Luís XVI, Felipe III, "el imbecil de Fernando" (VII) y el gobernador Juan Manuel de Rosas, como

figuras políticas representativas de un castigo *gobernado por el exceso*. A partir de ese momento, el periodo rosista ya integra el pasado penal cruel e incivilizado. La mención directa de un gobernante nativo como representante local de una penología del exceso da cuenta de que, a partir de la batalla de Caseros, el periodo rosista integra decididamente el pasado penal y del cual es preciso desprenderse (Caimari, 2002, 145).

Por otro lado, en estos dichos de Tejedor y Sagui hay dos temas bien interesantes: el primero se relaciona con la coherencia entre el pasado colonial, su legislación importada y los sistemas de gobierno como representativos del exceso. La fuerte asociación realizada por Tejedor entre formas de gobiernos pre-modernos, incivilizados y la legislación española nos proporciona una idea bastante aproximada acerca de la necesidad que urge - para este autor - de salir de una buena vez de los esquemas planteados por una legislación importada, de estirpe monárquica, que nada se asemeja a los ideales de la “república posible”. A su vez, el hecho de que Sagui mencione a Juan Manuel de Rosas no se presenta como una ejemplificación más en ese amplio repertorio de los así calificados como “déspotas” o “tiranos”¹⁰. Rosas vendría a ser un “representante nativo” de estas formas de castigo. Por lo tanto, para estos autores argentina posee una penalidad premoderna, alineada con los parámetros de una económica del exceso y de cuya herencia es necesario renegar.

Con respecto al segundo tema – muy próximo al primero aunque con ligeras variantes - se puede visualizar una crítica implícita a la herencia legislativa importada del contexto europeo no solo como un andamiaje jurídico vetusto, sino como una advertencia sobre las operaciones de transplantes culturales, inconsistentes e ineficaces con respecto a las efectivas necesidades locales.

Como señalan Aguirre y Salvatore, “...existía un esfuerzo deliberado por parte de los legisladores republicanos de abandonar, o al menos modificar, el derecho español en aquellos aspectos considerados como anacrónicos, bárbaros, injustos o arbitrarios. El derecho español, como sabemos, esta dividido en varias jurisdicciones (real, eclesiástica, legal, *de gentes*), sujeta a múltiples y contradictorias interpretaciones, y con una intolerable admisión del privilegio” (Aguirre-Salvatore, 2001, 3). De esta manera, la legislación española del Fuero Juzgo, Fuero Real, etc. posibilitan por ejemplo, un sistema heterogéneo, e incoherente en donde cada juzgado puede decidir arbitrariamente. Con esta situación, emergerán – sobre todo

¹⁰ Los temas relativos a la violencia, el delito y la justicia penal durante el gobierno de Rosas han sido estudiados por Ricardo Salvatore (1993-1994; 2001) Richard Slatta y Karla Robinson (1990)

en relación al estado y sus principales agencias operadoras (jueces, fiscales, policía, ejército) – acciones que tiendan a “poner límites” al ejercicio del poder estatal (Aguirre-Salvatore, 2001, 13-14).

Restricción

La emergencia de una “economía restrictiva” o “economía penal de los límites” en la argentina esta unida a un proyecto de modernidad basado en el progreso, en un inexorable camino hacia la civilización. La relación “civilización-castigo” indica no solo la penetración de una corriente que declama ciencia y razón en senderos de practicas incivilizadas, sino también el nacimiento de una nueva relación que, aunque con claros vestigios de una penalidad “mal administrada”, plantea una cultura penal colonizada por el ideal civilizatorio y con ello, el monopolio del poder de castigar con arreglo al principio de legalidad, sus límites, sus restricciones.

La sanción de una Constitución Nacional en 1853 - que no tendría incluida a la provincia de Buenos Aires, la “hermana mayor”, hasta 1860- y su principio de legalidad, es un hecho de fundamental trascendencia para hablar de principios de restricción en del derecho de punir. La proporcionalidad de las penas, que se traduce en un equilibrio entra la infracción cometida y el mal recibido por ello es también otro dato relevante (Cabral, 1865, 18; Laurencena, 1877, 9).

En este último punto, es interesante observar como el “circuito cerrado” del triangulo “ley-delito-castigo” comienza a ser penetrado – dejando con ello flancos abiertos – por otros criterios alternativos: la graduación de las penas, por ejemplo. Dice Silos Suviela: “Y estos da nacimiento a dos nociones; la del delito que no es otra cosa que el nombre jurídico del daño producido y la pena que deben imponerse al criminal, que es otro mal que la sociedad le impone al delincuente (...) y si se quiere, da nacimiento también a una tercena noción: la *graduación* de las penas” (Silos Suviela, 1880, 40).

Por otro lado, la sociedad, al ejercer por medio la autoridad, el poder que tiene para castigar debe hacerlo con límites y restricciones, desechando cualquier signo de voluntarismo arbitrario: “...este derecho no se puede ejercer sino con ciertas *restricciones*” (Laurencena, 1877, 32); “...en el ejercicio de este derecho, esta *restringida* por la ley natural” (Pío Cisneros, 1878, 43); esta “*limitado y reglado*” por la moral en el ejercicio de ese poder de fuerza y represión que le asiste (Fernández Blanco, 1879, 79); el derecho de penar, señala

Rodríguez Soto, como medio de protección de la sociedad “...debe ser legitimo, esto es, *ajustado* a la moral y *proporcionado* también a la necesidad” (Rodríguez Soto, 1886, 16).

Como se ve, estas relaciones “castigo/limite”, “castigo/restricción”, “castigo/moderación” “castigo/ajuste”, “castigo/proporción” están bien presentes en el discurso de los tesisistas. Opera como presupuesto conceptual y práctico en íntima relación con la sanción de las leyes: “Si el deber de la sociedad es garantizar los derechos de las personas, por el medio legal de la imposición de las penas, es claro pues, que solo en este caso u otros semejantes podrá usar esta facultad. Niego, pues, terminantemente que la imposición de las penas, sea *voluntaria o arbitraria* en la sociedad” (Silos Suviela, 1880, 40-41).

Al mismo tiempo y en forma continua o de secuencia, surge otro criterio limitador no ya en el castigo mismo – aunque este sirva como medio – sino en ese hombre que obra con discernimiento, voluntad y razón.

Una historia del presente: la relación delito- castigo

En su artículo “*Criminology: the birth of a special knowledge*” Pasquale Pasquino se refiere a la relación entre la ley, el delito y el castigo de la siguiente manera: “En la teoría clásica, la justicia penal fue construida alrededor de un triángulo formado por la ley, el delito y el castigo: la relación entre estos tres elementos están definidos en tres apotegmas canónicos: *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crime sine poena legale*: no hay castigo posible sino esta contemplado en la ley – un acto es punible solo si transgredí la ley – no hay castigo sin crimen – la existencia del acto criminal debe ser probada; por último, un crimen consiste en una mera infracción a la ley” (Pasquino, 1991, 237).

Estos tres principios mencionados por Pasquino, habrán de ser relevantes a la hora de evidenciar una nueva *economía penal de los límites* en la argentina posterior a la Batalla de Caseros, posterior a la sanción de la Constitución Nacional. Pasquino mismo sostiene que la construcción de esta justicia penal, se materializó dentro un proceso mas amplio de cambios históricos entre los cuales figura “...la fijación de límites al poder arbitrario de la realeza” (Pasquino, 1991, 237), que en primer instancia, se manifestó con el movimiento codificador.

La noción de castigo va unida a la noción de delito. Como señala Garland, castigo “...es el procedimiento legal que sanciona y condena a los transgresores del derecho penal, de acuerdo con categorías y procedimientos legales específicos” (Garland, 1999, 33).

En primer lugar entonces, se puede afirmar que todo hombre -“asociado” con otros hombres- que cometa un delito o infracción a la ley, deberá afrontar una correspondiente forma de castigo previamente determinada.

En segundo lugar, es necesario concebir al castigo como una forma de control de delito sin minimizarlo o reducirlo a un mero artefacto instrumental, es decir, un medio para el control y/o respuesta al delito (Garland, 1999, 34-36). En relación a este segundo aspecto, Juan Pegoraro sostiene que la relación “delito-castigo” no es un esquema real debido a la complejidad de un orden social impuesto como resultado de un choque de fuerzas (que se explicita en la guerra). Dada esta complejidad de fuerzas representadas por instituciones y personas (y que motivan la fundamental pregunta ¿Por qué se puede castigar?) el castigo esta lejos de reducirse a ser una mera reacción ante una “inconducta” (Pegoraro, 2007, 1-28).

Como se lee en las tesis doctorales analizadas, la respuesta del sistema penal ante un delito – previamente determinado por la ley – es una sanción impartida por el estado. Sin embargo, si se analizan el discurso en torno a las causas de inimputabilidad - como la embriaguez o la locura - la relación comienza a no ser del todo directa pues, quien comete un delito siendo loco o ebrio, no merece la misma pena que aquella persona que aun poseía libre albedrío (Sozzo, 2007a; 2007b).

Sin perjuicio de que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, comenzó a generarse un discurso a favor de restringir el poder del estado en sus prácticas penales propias de una penología de la prodigalidad, en la actualidad asistimos a un resurgimiento de una “economía del exceso” a partir de un considerable despliegue de violencia y crueldad en el área de la penalidad.

La llamada “Tolerancia cero”, los planteos de una “Guerra contra el crimen”, los campos de entrenamiento forzosos militarizados (llamados “Boot camp”) la “Cadena de forzados” que trabajan en las autopistas, la legislación de los “Tres strikes y estas afuera” el enamoramiento, a partir de la década del 70’, de la pena de muerte en Estados Unidos, el retorno de los sistemas de aislamiento o confinamiento solitario en las prisiones, el toque de queda, las detenciones domiciliarias como medidas incapacitadoras, son quizás, algunos ejemplos de este giro punitivo en las sociedades contemporáneas (Feeley y Simon, 1995, 38, 45-46; Pratt, 2006a, 34-56; 2006b, 26; Hallsworth, 2006, 58-63, 66-72; Simon, 2006, 87-90; Garland, 2005, 42-44, 48-51; 2006, 94, 103-108; Pavarini, 2006, 131-134; O’Malley, 2006, 211-229; Font, 1999, 113-115; Sozzo, 2007a, 64-65; 2007c, 2-5).

De esta manera, las conquistas positivas de una economía restringida en el área de la penalidad se repliegan y buscan formas elásticas de implementación que favorezcan a los excesos, resucitando así, aquellas “estrategias arcaicas” del *ancient regime* (Garland, 2006, 104). Todo ello configura lo que Massimo Pavarini llama una “penología grotesca” (Pavarini, 2006, Foucault, 2002, 25).

En este sentido, se vuelve a distorsionar los principios del debido proceso; renace la desproporción entre la relación delito-castigo, se la simplifica, se la aísla de toda su complejidad intrínseca (el castigo justo bien puede ser un castigo “sin límites”); aumenta la población carcelaria; resucitan las leyes y penas draconianas (Garland, 2005, 43; Pavarini, 2006, 133) y se produce un proceso de desplazamiento en los discursos de aquellas “élites intelectuales” que fundamentaban una “cultura de la penalidad” basada *límites y constricciones* hacia una apropiación político electoral en donde el delito y la inseguridad vuelve a encontrar a representantes (acontecimiento de “politización” de la penalidad) y ciudadanos (acontecimiento de “popularización” de la penalidad) nuevamente comunicados, a partir de los *riesgos* sembrados por la criminalidad emergente (Sain, 2002, 9-10; Garland, 2005, 45-48; 2006, 94-95; Hallsworth, 2006, 68; Pavarini, 2006, 132-133; Ganon, 1999, 68; Sozzo, 2007b, 13-14; Sparks, 2007, 43-44).

Refrendando esta última línea de análisis, bien señala Pavarini, que “...en los sistemas democráticos, tal vez por primera vez la penalidad se transforma en un elemento significativo (en algunos casos incluso, el principal) del intercambio político entre electores y elegidos, entre opinión pública y sistema político” (Pavarini, 2006, 132). Como consecuencia se ello “... la compasión hacia los delincuentes es progresivamente suplantada por una preocupación exclusiva por las víctimas, los políticos de todos los partidos son estimulados a tomar medidas duras, no despojadas de connotaciones populistas” (Garland, 2006, 94). Los representantes políticos deben expresar respuestas de seguridad y protección que satisfagan las sensibilidades y ansiedades de la población victimizada.

En consecuencia, esta breve caracterización del presente, nos permite dejar a un lado cualquier especulación que puede aludir a la premisa de que la economía restringida llevo en el siglo XIX para quedarse definitivamente. Por el contrario, es necesario leer estos procesos no en términos de grandes sustituciones o cambios epocales sino más bien en el contexto de una analítica que se permita observar las trayectorias y resistencia que fueron paulatinamente emergiendo.

Bibliografía:

- AGUIRRE, Carlos y SALVATORE, Ricardo: "Writing the history of Law, Crime and Punishment in Latin America". En SALVATORE-AGUIRRE-GILBERT (2001). Págs. 1-32.
- BATAILLE, George: "La parte maldita". 1949.
- Publicado en www.nodo50.org/dado/textosteoria/bataille.rtf
- CABRAL, Emilio: "Derecho de castigar", 1865.
- CAIMARI, Lila: "Apenas un delincuente". Buenos Aires. Siglo XXI. Buenos Aires. 2004. Pág. 29 a 50.
- CAIMARI, Lila: "Castigar civilizadamente. Rasgos de la modernización punitiva en al Argentina (1827-1930)", en Gayol, Sandra y Kessler, Gabriel: "Violencias, Delitos y Justicias en al Argentina". Manantial-Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires. 2002. Pág. 141-167.
- CAIMARI, Lila (Compiladora). "La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940)". Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2007.
- CANDIOTI, Marcel: "Bibliografía doctoral de la Universidad de Buenos Aires y catalogo cronológico de las tesis de su primer centenario". 1821-1920. 1920.
- DEL OLMO, Rosa. "Criminología Argentina". Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1992. Pág. 1 a 22.
- ESTEVES SAGUI, Miguel: "Conferencia de apertura para el Curso de Derecho penal de 1871". Buenos Aires. Revista Argentina. 1871. Págs. 133-159.
- FEELEY, Malcom y SIMON, Jonathan: "La nueva penología: notas acerca de las estrategias emergentes en el sistema penal y sus implicaciones". Revista "Delito y sociedad". Ediciones UNL. Santa Fe. 1995. Año IV. N° 6/7. Pág. 33-58.
- FERNÁNDEZ BLANCO, Valentín: "Exposición y examen crítico de los diversos sistemas que se han formulado para explicar el origen del derecho de castigar", 1879.
- FONT, Enrique: "Transformaciones en el gobierno de la seguridad: análisis exploratorio de conceptos y tendencias. Su relevancia en la Argentina. En Sozzo (2005a). Págs. 89-118.
- 2001.
- FOUCAULT, Michel: "Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión". Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 2002.

- GANON, Gabriel: “Reforma de la policía: ¿cambio organizacional o estructural? En Sozzo (2005a). Págs. 65-88.
- GARLAND, David: “Castigo y sociedad moderna”. Siglo XXI Editores. México. 1999. Págs. 13-38.
- GARLAND, David: “La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea”. Gedisa. Barcelona. 2005. Págs. 31-70.
- GARLAND, David: “Las contradicciones de la sociedad punitiva: El caso británico”. Revista “Delito y Sociedad”. Ediciones UNL. Santa Fe. 2006. Págs. 93-111.
- GAYOL, Sandra y KESSLER, Gabriel: “Violencias, Delitos y Justicias en al Argentina”. Manantial-Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires. 2002.
- HALLSWORTH, Simón. “Repensando el giro punitivo. Economía del exceso y criminología del otro”. Revista “Delito y Sociedad”. Ediciones UNL. Santa Fe. 2006. Págs. 57 a 66.
- JOHNSON, Lyman (Editor): “The problem of order in changing societies. Essays of crimen and policing in Argentina and Uruguay”. Albuquerque. University of México Press. 1990.
- LAPLAZA, Francisco. “Antecedentes de nuestro periodismo forense hasta la aparición de la ‘Revista Criminal’ (1873) como introducción a la historia del derecho penal argentino”. Revista Penal y Penitenciaria. Buenos Aires. 1945.
- LAURENCENA, Miguel: "Derecho de castigar. Su fundamento", 1877.
- LEVAGGI, Abelardo: "La pena de muerte en el derecho penal argentino precodificado". Buenos Aires. Revista del Instituto de Historia del Derecho “Ricardo Levene”. N° 23. 1972. Págs. 17-91.
- LEVAGGI, Abelardo: "Historia del derecho penal argentino". Perrot. Buenos Aires. 1977.
- MARTEAU, Juan: "Las palabras del orden" Proyecto republicano y cuestión criminal en Argentina (Buenos Aires 1880 -1930)". Editores del puerto. Buenos Aires. 2003.
- NILVE, Moisés: “La vigencia del proyecto Tejedor como código penal de las provincias Argentinas”. Revista Penal Penitenciaria. 1945. Pág. 35 a 48.
- O’MALLEY, Pat. “Riesgo, neoliberalismo y justicia penal”. Ad-Hoc- Buenos Aires. 2006.
- PASQUINO, Pasquale: “Criminology: the birth of a special kwoledge”. En BURCHELL, Graham *et al* (2001). Págs. 235-250.

- PAVARINI, Máximo: “La justificación imposible. Historia de la pena. Entre justicia y utilidad”. Revista “Delito y sociedad. Ediciones UNL. Santa Fe. 1992. Año I. N° I. Pág. 9 a 21.
- PAVARINI, Máximo: “Un arte abyecto. Ensayo sobre el gobierno de la penalidad”. Ad-Hoc. Buenos Aires. 2006. Pág. 105 a 134.
- PEGORARO, Juan S.: “Notas sobre el poder de castigar”.
- http://www.catedras.fsoc.uba.ar/pegoraro/Materiales/Notas_sobre_el_Poder_de_Castigar.pdf
- PESTALARDO, Agustín: “Historia de la enseñanza de las ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Buenos Aires”. Buenos Aires. Imprenta Alsina. 1914.
- PESTALARDO, Agustín: “En el centenario de la Universidad de Buenos Aires”. Buenos Aires. Revista “La semana medica”. 1921.
- PIDIVIDAL, Rafael: “Fundamento del derecho que tiene la sociedad para castigar” - 1860.
- PIÑERO, Norberto: “Conferencia de apertura para la cátedra de Derecho Penal”. Revista Jurídica. 1887. Año IV, Tomo IV, 1887.
- PÍO CISNEROS, José: "Derecho de castigar", 1878.
- PRATT, John. “Castigo y civilización”. Barcelona. Gedisa. 2006a. Págs. 15-59.
- PRATT, John. “El castigo emotivo y ostentoso. Su declinación y resurgimiento en la sociedad moderna”. En Revista “Delito y Sociedad”. Ediciones UNL. Santa Fe. Año 15. Número 22. 2006b. Pág. 33-56.
- RODRÍGUEZ SOTO, Ramón: "Origen y fundamento del derecho de castigar", 1886.
- SAIN, Marcelo: “Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina”. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2002.
- SALVATORE, Ricardo: “El imperio de la ley. Delito, estado y sociedad en la era Rosista”. Ediciones UNL. Santa Fe. Año 3. Número 4 y 5. 1993-1994. Págs. 93-118.
- SALVATORE, Ricardo: “The crimes of Poor *Paysanos* in midnineteenth – Century Buenos Aires”. En AGUIRRE, Carlos and BUFFINGTON, Robert (2001).
- SALVATORE, Ricardo, AGUIRRE, Carlos and GILBERT Joseph (Editors). "Crime and punishment in Latinoamerica. Law and society, since late colonial times". Duke University Press. Durham. London. 2001.
- SEGUI, Juan Francisco. "Sistemas penales. Investigaciones sobre el origen y fundamento del derecho de castigar", 1884.

- SILOS SUSVIELA, Domingo. "Origen del derecho de castigar y fundamento de la penalidad", 1880.
- SILVA RIESTRA, Juan. "Carlos Tejedor. Su influencia en la legislación penal argentina". Anales del Instituto Popular de Conferencias. 1936. Tomo XXI. Pág. 60 a 82.
- SIMON, Jonhatan. "Gobernando a través del delito". En Revista "Delito y Sociedad". Ediciones UNL. Santa Fe. Año 15. Número 22. 2006. Pág. 75-91.
- SLATTA, Richard and ROBINSON, Karla: "Continuities in crime and punishment Buenos Aires 1820-1850". En JOHNSON, Lyman (Editor) 1990.
- SOZZO, Máximo: "‘Traduttore traditore’. Traducción, importación cultural e historia del presente de la criminología en América Latina". En Sozzo, Máximo (Coord.): "Reconstruyendo las criminologías críticas". Ad-Hoc. 2006a. Buenos Aires. Pág. 353 a 430.
- SOZZO, Máximo: "Locura y crimen en el nacimiento de una racionalidad penal moderna en Argentina". 2006b S/C. Mimeo.
- SOZZO, Máximo. "Retratando al *homo criminales*. Esencialismo y diferencia en las representaciones profanas del delincuente en la Revista Criminal (Buenos Aires. 1873)". En CAIMARI, Lila (2007). 2007a Pág. 23-65.
- TAYLOR, Ian, WALTON, Paul, YOUNG Jock. "La nueva criminología. Contribución a una teoría social de la conducta desviada". Buenos Aires. Amorrortu. 1990, 19-28
- TEJEDOR, Carlos: "Curso de derecho criminal". Joly. Buenos Aires. 1860.
- TEJEDOR, Carlos: "Proyecto de Código Penal para la República Argentina". Imprenta del Comercio del Plata. Buenos Aires. 1866.
- VIANA, José: "Penalidad". 1869.